El Maipo



Colombia a una década de la paz con las FARC-EP: ¿por qué el conflicto armado continúa?

Posted on Noviembre 26, 2026

La desmovilización fue real, pero la persistencia de otros grupos armados plantea una pregunta de fondo: ¿por qué el fin de la insurgencia de las FARC no se tradujo en el fin del conflicto en este país sudamericano?

Una década después de la firma del **Acuerdo de Paz** entre el **Estado colombiano** y las **Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)**, la principal guerrilla del país dejó de existir como organización armada unificada. Sin embargo, el conflicto armado no terminó: nuevas estructuras disputan territorios, controlan economías ilegales y mantienen a comunidades enteras bajo amenazas y desplazamientos.

La reorganización de la violencia

El acuerdo permitió reducir los enfrentamientos entre el Estado y las FARC-EP y abrió un camino para que miles de combatientes se incorporaran a la vida civil. No obstante, **la salida de esa guerrilla dejó vacíos de poder** en zonas donde la presencia institucional seguía siendo limitada y otros actores armados mantenían intereses económicos y estratégicos.

Entrevistado por Sputnik, Juan Jaramillo, experto en gestión de movimientos sociales y construcción de paz, considera que el proceso tuvo un resultado concreto en la reducción de la violencia, pero **no logró modificar las condiciones estructurales que alimentaban el conflicto.**

“Un muerto menos es una ganancia”, afirma. Sin embargo, advierte que la desmovilización no estuvo acompañada de transformaciones suficientes **en materia de pobreza, desigualdad y presencia estatal.**

Por su parte, el reverendo Edilson Huérfano, miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, señala que la desconfianza histórica frente al cumplimiento de los acuerdos de paz influyó en la decisión de algunos combatientes de no dejar las armas. **“Muchos de ellos no firmaron precisamente porque tuvieron esa referencia histórica de que nunca les cumplieron”**, sostiene al ser consultado por este medio.

Según él, es importante distinguir entre quienes nunca se acogieron al acuerdo, quienes posteriormente retomaron las armas y los jóvenes que se incorporaron después a las estructuras armadas. **“Hay una mezcla de dos generaciones”**, precisó Huérfano, quien además sostiene que los nuevos integrantes no necesariamente tienen la **formación política e ideológica de la antigua guerrilla.**

Según un inventario de las Fuerzas Militares con corte a julio de 2026, divulgado en noviembre, cuatro facciones reunían 10.569 integrantes, 6.804 personas en armas y 3.765 integrantes de redes de apoyo, los cuales se dividen, a su vez, entre el Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco; Estado Mayor de los Bloques y Frentes, asociado a Calarcá Córdoba; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la Segunda Marquetalia. Entre estas estructuras, el EMC concentra la mayor proporción de casos de reclutamiento forzado de menores.

Los corredores estratégicos de la nueva confrontación

Catatumbo y **Cauca** muestran cómo la salida de las FARC-EP **no significó el fin de las disputas armadas.** En esas regiones, diferentes estructuras han buscado controlar corredores estratégicos, poblaciones y economías ilegales.

En Catatumbo, por ejemplo, la ofensiva del **ELN** contra el Frente 33, en enero de 2025, **desencadenó una de las mayores crisis humanitarias recientes del país.** La Defensoría del Pueblo registró **más de 105.000 personas afectadas** hasta diciembre de ese año, principalmente por desplazamientos forzados y confinamientos.

En Cauca, la confrontación entre disidencias y el ELN responde también a disputas por el control territorial

y las rentas ilegales. La Defensoría ha documentado el reclutamiento de menores y las presiones sobre comunidades que quedan atrapadas en el medio del conflicto. Estos escenarios **muestran que la violencia no se reproduce únicamente por la permanencia de antiguas estructuras guerrilleras.** También responde a la competencia por territorios donde las economías ilegales ofrecen recursos para sostener organizaciones armadas.

La Fiscalía ha documentado investigaciones sobre la participación de estas en circuitos de narcotráfico y minería ilegal. Sin embargo, los expertos advierten que la presencia de un grupo en un municipio donde existe explotación minera o narcotráfico no demuestra, por sí sola, que sean ellos los que controlen o desarrollen esa actividad.

Las deudas del Acuerdo

La persistencia del conflicto también obliga a revisar qué ocurrió con los compromisos del Acuerdo. La **Reforma Rural Integral**, considerada uno de sus pilares, continúa entre los componentes con mayores dificultades.

La Contraloría reportó que, hasta abril de 2026, se habían adjudicado poco más de 107.000 hectáreas, **alrededor del 4% de la meta de tres millones.** Aunque la formalización de tierras presenta avances mayores, la distancia entre los compromisos y los resultados evidencia las dificultades para transformar las condiciones de las zonas más afectadas por el conflicto.

La seguridad de quienes dejaron las armas también sigue siendo un problema y no se limita a los homicidios. Desde la firma del Acuerdo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha documentado **501 asesinatos de antiguos combatientes, además de 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas.** Los registros muestran que la protección de quienes dejaron las armas sigue siendo uno de los principales desafíos para garantizar su permanencia en la vida civil.

La paz pendiente

El presidente **Abelardo de la Espriella** ha cuestionado el costo y los resultados del acuerdo. El 24 de noviembre afirmó que se habían destinado **178,59 billones de pesos (casi 50 mil millones de dólares)** a su implementación y lo calificó como una “falsa paz”. Sin embargo, los recursos asignados no equivalen necesariamente a los efectivamente ejecutados, una distinción central para evaluar el cumplimiento de los compromisos. La experiencia de estos 10 años muestra que desarmar una organización no basta si las comunidades siguen expuestas a la disputa por sus territorios y si las instituciones no consiguen garantizar condiciones de vida y seguridad.

“No hay ninguna posibilidad de que se configure una paz estable y duradera si no es una paz desde los territorios y con las comunidades”, considera Jaramillo.

Una década después, **Colombia** puede mostrar que logró desmovilizar a una de las guerrillas más antiguas del mundo. Lo que todavía no ha conseguido es impedir que otros actores ocupen los espacios que dejó, se disputen sus recursos y reproduzcan la violencia. Esa es la paradoja que sigue definiendo el proceso de paz.

El Maipo/Sputnik